

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 09 de Marzo 2020.

Auto Interlocutorio No. _____

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

| | |
|-------------|---|
| ACCIÓN: | REPARACION DIRECTA |
| EXPEDIENTE: | 76001-33-33-003-2019-00170-01 |
| DEMANDANTE: | EDISON GERMAN PISO RODRIGUEZ |
| DEMANDADO: | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
| ASUNTO | APELACIÓN DE AUTO RECHAZA PARCIALMENTE DEMANDA POR CADUCIDAD – CONFIRMA |

I. OBJETO DE LA DECISION

Se procederá a resolver el recurso apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 884 del 21 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali, mediante el cual se rechazó parcialmente la demanda por haber operado la caducidad de la acción frente a una de las pretensiones.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, Edison Germán Pizo Rodríguez y otros demandaron¹ para que se declare administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Justicia - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Por los perjuicios causados a los accionantes como consecuencia del daño causado a Edison Germán Pizo Rodríguez, en calidad de lesionado en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí, por falla o falta del servicio de la administración derivada de los siguientes hechos:

- En el mes de julio de 2015, el demandante recibió una lesión en su ojo derecho, propinada por otro recluso.
- El 10 de septiembre de 2017, el demandante fue lesionado en su mano derecha por un dragoneante de la institución carcelaria y para la misma fecha sufrió una caída en el baño.

¹ Ver folios 1 – 14.



III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 884 del 21 de agosto de 2019², la *A- quo* rechazó parcialmente la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad, frente a las lesiones ocasionadas al señor Edison Germán Pizo Rodríguez, en el mes de julio de 2015.

Como sustento de su decisión, adujo que según la historia clínica aportada al plenario, el interno presenta “hemianopsia en ojo derecho” desde el año 2015 y que, en consecuencia, desde la fecha de los hechos que motivaron la demanda, el demandante padeció de manera inmediata el daño por el que reclama una indemnización. Que, conforme a lo dicho, desde la fecha de causación del daño hasta la fecha de presentación de la demanda, ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte recurrente³ que el afectado obró diligentemente una vez ocurridos los hechos y que ante la falta de atención médica, formuló acción de tutela, frente a la cual el Juzgado 1 Penal de Adolescentes profirió sentencia del 8 de octubre de 2015, a través de la cual resolvió tutelar el derecho a la dignidad y a la salud del demandante y que el INPEC no demostró el cumplimiento de lo ordenado en dicha providencia.

Que dos años después, el demandante formuló otra acción de tutela, frente a la cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias profirió la providencia del 27 de noviembre de 2017, en la que nuevamente fueron tutelados sus derechos. Ante el incumplimiento de lo ordenado en la sentencia, por parte del INPEC, el demandante inició incidente de desacato, frente al cual el INPEC señaló que el interno fue valorado el 5 de octubre de 2017 y, según diagnóstico, le fue ordenada valoración por especialistas en dermatología, optometría y medicamentos; que el 1 de diciembre de 2017, la Dra. Claudia Santacruz emitió la orden de valoración por oftalmología, la cual fue reiterada el 9 de febrero de 2018.

Aseveró que el demandante sólo fue examinado por el oftalmólogo el 28 de mayo de 2018, quien diagnosticó “*cicatriz macular, ruptura de córnea*” y le formuló lentes de protección, los cuales no le han sido suministrados. Concluyó que, en el presente caso, el daño no fue inmediato ni se concretó en un momento determinado aunado a que el actor rápidamente formuló las acciones legales correspondientes.

² Ver folios 153 – 154.

³ Ver folios 155 – 159.



V. CONSIDERACIONES:

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con los artículos 243 y 125 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se rechaza la demanda es pasible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala:

“Artículo 243.- Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

*1. El que rechace la demanda.
(...)”*

“Artículo 125.- De La Expedición De Providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, (...)”

5.2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer:

- ¿Se encuentra ajustada o no a derecho la decisión de la A-quo en auto interlocutorio nro. 884 del 21 de agosto de 2019, que rechazó parcialmente la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de caducidad?

Para resolver el precitado problema jurídico, es pertinente realizar un recuento normativo y jurisprudencial acerca de la caducidad en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y luego aplicarla al caso concreto.

4.3 LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Para efectos de la decisión el Despacho tiene en cuenta las siguientes disposiciones legales y pronunciamiento judiciales.

El artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera

otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.”

El artículo 164 numeral 2 literal d) del CPACA, en relación con la oportunidad para presentar la demanda del medio de reparación directa, prevé:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.; (...).”

El artículo 3 del Decreto 1716 de 2009⁴, establece lo siguiente:

“Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:

a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o

b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o

c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.

En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbadado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.

La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada. (...).”

Respecto de la caducidad de las acciones, se debe decir que esta institución jurídica se estableció por el Legislador como una forma de lograr la seguridad jurídica que propende por el interés general, la cual es de obligatoria observación y aplicación por el juzgador al momento de admitir la demanda.

⁴ Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.



Además, la Sección Tercera del Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha señalado la finalidad de la caducidad en el ordenamiento jurídico como “una sanción en los eventos en que determinados medios de control no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional”⁵, haciendo énfasis en que la figura de la caducidad tiene como fundamento la seguridad jurídica, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo.

El Consejo de Estado en sentencia del 2 de mayo de 2016, sostuvo⁶:

1. *“La caducidad es un fenómeno jurídico en virtud del cual el demandante pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción, por no haber ejercido su derecho dentro del término que la ley señala. En la caducidad deben concurrir dos supuestos: el transcurso del tiempo y el no ejercicio de la acción.*

2. *Dicho término está edificado sobre el beneficio de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no. Es por lo anterior que no puede ser materia de convención antes de que se cumpla, ni puede renunciarse después de transcurrido.*

3. *La facultad de accionar comienza con el plazo fijado por la ley y nada obsta para que se ejerza desde el primer día, pero fenece definitivamente al terminar el plazo improrrogable, pues opera de pleno derecho al contener plazos no susceptibles de interrupción ni de suspensión -salvo aquella que deviene con ocasión de la celebración del trámite de la conciliación prejudicial-⁷.*

4. *La caducidad de la acción de reparación directa se encuentra prevista en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que indica que el plazo para la presentación de la demanda expira vencido el lapso de dos años “(...) contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.*

5. *De lo anterior se desprende que, como regla general, el término de caducidad para una acción como la que se estudia en esta providencia debe iniciar su contabilización a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho que genera el daño cuyo resarcimiento se pretende. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Sección ha sido reiterativa en su jurisprudencia, en el sentido de que esta regla no resulta aplicable a todos los casos, dado que algunas circunstancias específicas en la producción del daño hacen que su manifestación a quien lo sufre no sea concurrente con el aludido hecho que lo generó. **Esta Sección, sobre el***

⁵ CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A - Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA - Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017) - Radicación número: 20001-23-39-003-2015-00565-00(59291)..

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B. Magistrado Ponente DANILO ROJAS BETANCOURTH. Providencia del 2 de mayo de 2016. Radicación No. 190012331000200501594 01.

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 24 de abril del 2008, exp. 16699, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.



particular, en reciente providencia manifestó⁸:

La jurisprudencia de esta Sección ha señalado que pueden darse eventos en los cuales la manifestación o conocimiento del daño no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando –en consecuencia- ajeno a un principio de justicia que, por esa circunstancia que no depende ciertamente del afectado por el hecho dañoso, no pueda éste obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en aplicación del principio pro danmaturum y en consideración a que el fundamento de la acción de reparación es el daño, se ha aceptado que en tales casos el término para contar la caducidad de la acción indemnizatoria empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste el daño.

6. En la misma decisión, la Sección sostuvo lo siguiente en cuanto a los daños que se agravan tiempo después de la ocurrencia del hecho⁹:

En el marco de ese mismo universo, ha reconocido la jurisprudencia que ocurren eventos en los cuales los daños pueden provenir de un acontecimiento de agotamiento instantáneo, pero que también puedan –ocasionalmente- provenir de un hecho que se va produciendo de manera paulatina o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también, en el ámbito de la contabilización del término de caducidad de la acción. En el primer caso no cabe duda en cuanto a que el término para interponer la demanda resarcitoria ha de empezar a contabilizarse a partir del día siguiente a aquel en que se produjo el acontecimiento dañoso (y esta constituye la regla general), pero también puede ocurrir que los efectos del daño se agraven con el tiempo, o que fenómenos sucesivos y homogéneos puedan producir daños continuos.

En eventos como estos últimos, se ha señalado por la jurisprudencia, que ha de tenerse cuidado de no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo daño (sentencia de 2 de junio de 2005, exp: AG-25000-23-26-000-2000-00008-02) pues en este último evento el término para ejercitar la acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio origen, y no así cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos hechos u omisiones, o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término para reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada uno de los daños derivados de esos sucesivos eventos (negrillas fuera del texto).

7. En lo que tiene que con los daños derivados del quebranto en la corporalidad de las personas, la jurisprudencia de la Sala también ha mantenido la línea de que el plazo para la presentación de la correspondiente demanda debe iniciar en el momento en el que es evidente la causación de dicho menoscabo, como se aprecia en el siguiente aparte¹⁰:

Considera la Sala que le asiste razón al a quo, al señalar que en el caso

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 21200, C.P. Hernán Andrade Rincón.

⁹ *Ibidem*. Ver en este mismo sentido sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 17542 M.P. Mauricio Fajardo Gómez; 3 de marzo de 2010, exp. 37691 y sentencia del 10 de diciembre de 2010, exp. 2010-0125, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 7 de octubre del 2013, expediente 18373, CP. Ruth Stella Correa Palacio.



Radicación : 2019-00170-01
 Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
 Accionante : EDISON GERMAN PIZO RODRÍGUEZ
 Accionado : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

7

concreto operó el fenómeno de la caducidad, habida consideración de que la causa del daño neurológico que padece el menor se hace derivar de la falla del servicio médico que se le prestó el 30 de agosto de 1992 y la demanda se interpuso el 5 de junio de 1997, esto es, superados los dos años previstos en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente al momento de interponerse la demanda, y desde esa misma fecha, o al menos, desde el momento en que el menor fue dado de alta, fue ostensible el daño neurológico, por el cual se reclama la indemnización. En síntesis, es claro que, según la demanda, la causa del daño neurológico sufrido por el menor, se produjo como consecuencia de la atención médica que se le brindó en el Hospital de Tumaco con ocasión de su ingreso a ese centro asistencial, el 30 de agosto de 1992, y que ese daño se hizo evidente trece días después de esa fecha, cuando el menor salió del estado de coma.

8. **Por último, no puede pasarse por alto que la Sección ha indicado de igual forma, que también en los casos en los que se estudie la responsabilidad por este tipo de daños, el plazo para accionar no se ve modificado por exámenes médicos que se realicen de manera posterior, sino que, por el contrario, siempre será el momento en el que se haga evidente el daño el que determine el inicio del plazo procesal¹¹:**

Si bien es cierto que con posterioridad se efectuó un dictamen médico legal a la menor en virtud del trámite de una acción de tutela, de fecha 31 de agosto de 1994, no es menos cierto que el término de caducidad no puede quedar sometido a eventuales exámenes médicos para establecer el estado actual de salud de un paciente; lo anterior en virtud de que, tal como se señaló anteriormente, cuando se pretende derivar responsabilidad al Estado por daños que continúan de forma indefinida en el tiempo, el hecho de que los efectos del daño se extiendan después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, pues si ello fuera así la acción nunca caducaría. De modo tal que mal haría en sostenerse que por el sólo hecho de que se hubieren elaborado nuevos exámenes médicos, se hubiere ampliado el correspondiente término de caducidad. (...) si bien es cierto que por mandato constitucional los derechos de los niños, en especial cuando se hallan en condiciones de debilidad manifiesta, son prevalentes (arts. 13 y 44 C.P.), dicha prelación no puede ser el fundamento único de una decisión favorable a la parte demandante en una acción de reparación directa por la falla en la prestación del servicio médico asistencial. Una decisión en tal sentido sólo puede obtenerse cuando se acredite que el daño le es imputable al Estado por haberlo causado (art. 90 C.P.). Los deberes que el Estado y los particulares tengan para con el menor pueden ser reclamados a través de vías judiciales diferentes, como lo son, entre otras, la acción de tutela, que la misma demandante intentó en contra del ISS y en cuya virtud obtuvo decisión favorable, pero la protección que su hija demanda no puede intentarse a través de esta acción, porque la misma tiene como objeto la reparación del daño que le sea imputable al Estado y no la asistencia social a las personas.

(...)

1. Sin embargo, debe recordarse que esta Subsección ha afirmado que para contar la caducidad de la acción cuando se demandan los daños derivados de una afectación corporal, no basta con tener en cuenta la fecha en la que se produjo la

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril del 2012, expediente 20134, CP. Mauricio Fajardo Gómez.

misma, sino que es preciso determinar el momento en el cual la víctima tuvo conocimiento completo e informado de su naturaleza, su irreversibilidad y de las repercusiones que podría generarle en su vida cotidiana:

Ahora, la Sala considera que en el caso particular no se demostró la concurrencia de circunstancias particulares y específicas de las que se pueda desprender una falta de conocimiento del daño por parte del demandante una vez se produjo el hecho generador; es decir, no hay prueba de que por alguna razón el daño, identificado éste por la misma demanda como el menoscabo en la corporalidad del señor Cortés Castillo, hubiese permanecido de alguna manera oculto o imperceptible para el demandante. Esto implica que para el 14 de octubre de 1998, época en la que se llevó a cabo la junta médica laboral, ya el demandante tenía conocimiento previo del daño.

*Sin embargo, es claro que aunque la naturaleza de la lesión, así como la forma violenta en la que ésta se produjo, hacen que necesariamente el daño hubiese sido evidente para la víctima desde el tiempo en el que se produjo, solo desde el momento en el que la junta médica laboral rindió su dictamen de calificación para efectos de la determinación de los índices de invalidez causados por la lesión, es que el señor Yairsiño Cortés Castillo adquirió un **conocimiento completo e informado** sobre la naturaleza de la lesión que sufrió, así como sobre sus repercusiones permanentes y en general las consecuencias que sobre el desarrollo de su vida cotidiana podría tener la herida que recibió.*

Desde este punto de vista, resulta de especial importancia el hecho de que solo desde el momento en el que se le realizó la calificación de invalidez al demandante, es que se pudo establecer que la incapacidad sufrida por el señor Cortés Castillo era de naturaleza relativa y permanente, dado que la postura jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado es que el término de caducidad debe contarse no solo desde que se conoce de la existencia del daño, sino desde que se adquiere certeza sobre la irreversibilidad del mismo¹²:

*“Con fundamento en las pruebas está demostrado que la señora Colmenares Tovar recibió una transfusión sanguínea en la Clínica Palermo de Bogotá, el 6 de octubre de 1989. Se expresa en la demanda que, como consecuencia de dicho procedimiento, se produjo el daño del cual se derivan los perjuicios cuya indemnización se reclama, en cuanto resultó contaminada con el virus de inmunodeficiencia humana VIH. A partir de esta fecha, entonces, tendría que contarse, en principio, el término de caducidad de la acción de reparación directa formulada, que, conforme al artículo 136 del Decreto 01 de 1984, modificado por el Decreto 2304 de 1989, era de dos años “contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa...”. **No obstante, esta Corporación ha expresado, en diferentes ocasiones, que si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de éstos, debe***

¹² [14] “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero del 2004, expediente 18273, CP. Alir Eduardo Hernández Enríquez”.



Radicación : 2019-00170-01
 Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
 Accionante : EDISON GERMAN PIZO RODRÍGUEZ
 Accionado : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

9

tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el paciente tiene conocimiento de ello. Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño ha sido efectivamente advertido. En el caso concreto, está probado que el diario *El Tiempo* informó, en sus ediciones del 2, 3 y 6 de septiembre de 1993, sobre la existencia de varios casos de contaminación con el virus mencionado, por medio de transfusiones sanguíneas realizadas en la Clínica Palermo de Bogotá, e hizo referencia, concretamente, a la sangre suministrada por un donante identificado como Luis Ernesto Arrázola Arrázola, entre enero de 1989 y septiembre de 1990, y por otro donante, cuyo nombre no se mencionó (prueba 1.10.). Está acreditado, además, que la señora Colmenares Tovar se practicó la prueba respectiva el 8 de septiembre de 1993 (prueba 1.4.) -esto es, pocos días después de la publicación de la noticia-, y que su resultado -“POSITIVO para VIH”- le fue comunicado el día 13 siguiente. De ello puede inferirse que, efectivamente, como se expresa en la demanda, fue en razón de la publicación de prensa que la señora Colmenares pensó que ella podía ser una de las personas afectadas y practicarse la prueba. Se concluye, así, que la citada señora sólo tuvo conocimiento de su enfermedad en la última fecha indicada, a partir de la cual comenzó a correr el término de caducidad de la acción¹³.” (negrillas del Tribunal)

5.3. CASO CONCRETO

De conformidad con el artículo 328¹⁴ del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306¹⁵ del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso.

Para resolver el recurso interpuesto, se tiene que, la caducidad es uno de los llamados presupuestos procesales del medio de control, esto es, uno de aquellos requisitos que se deben acreditar, *ab initio*, para que se pueda instaurar la demanda. Dichas exigencias, por regla general, deben ser verificadas en la primera etapa del proceso, es decir, en el momento del estudio para la admisión en la medida en que se debe propender por un control temprano del proceso.

¹³ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 2001-00158 (27152), C.P. Danilo Rojas Betancourth.

¹⁴ ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

¹⁵ ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

La caducidad del medio de control de reparación directa ocurre cuando éste no se ejerce dentro de los 2 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Pues bien, para verificar en el caso *sub examine* si frente a las pretensiones reclamadas debido al daño que padeció el señor Edison Germán Pizo Rordríguez al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC a raíz de los hechos acaecidos en el mes de julio de 2015, es necesario efectuar el análisis de la prueba documental allegada al plenario:

- Mediante sentencia del 8 de octubre de 2015¹⁶, el Juzgado Primero Penal para Adolescentes tuteló el derecho a la dignidad humana y a la salud del señor Edison Germán Rodríguez, vulnerados por parte del INPEC debido a los siguientes hechos:

- *“Indicar el actor que hace cuatro meses al interior de la institución, recibió un golpe en el ojo derecho, por lo que fue atendido en la enfermería concretamente por la Dra. SANDRA RAMOS, quien le prescribió unas gotas, al no ver resultados al tratamiento consultó de nuevo y la misma Dra. Le envió otras gotas diferentes a las primeras, pero tampoco le surtieron efecto, ya que veía borroso por lo que regresó de nuevo a la enfermería, pero en esta oportunidad ya no estaba la doctora RAMOS, sino otro, al ver las gotas que se estaba echando dijo que esas no eran las correctas y que se le habían dilatado las pupilas, por lo que le dio una remisión al hospital departamental, pero no ha recibido ninguna atención. Por lo que considera vulnerado el derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas y a la integridad personal, refiere jurisprudencia al respecto, por lo que solicita se le preste la atención en salud que merece”.*

- A través de sentencia del 27 de noviembre de 2017¹⁷, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali concedió el amparo de los derechos fundamentales del señor Edison Germán Pizo Rodríguez por el INPEC a raíz de lo siguientes hechos:

- *“Manifiesta que desde el 10 de septiembre del año 2017, viene presentando problemas de salud en la mano derecha, pues tiene una bola sin saber por qué le salió, resalta que probablemente fue a raíz de un golpe provocado por un guardia de seguridad .*

- *Igualmente, indica que presenta una lesión en la pierna izquierda por una caída en el baño y hasta el momento no le han brindado la atención adecuada, pues resalta que no se ha remitido al especialista a pesar de su estado de salud cada día se deteriora más.*

¹⁶ Ver folios 33-38.

¹⁷ Ver reverso folio 33-42.



- Señala que su visión se encuentra afectada y tiene el 65% de su salud deteriorada, de lo cual ya ha perdido el 35% de su movilidad, que por tal razón solicita que sea valorado por medicina legal”.
- Por medio de auto del 31 de enero de 2018¹⁸, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de sentencias, en virtud del incidente de desacato presentado por el señor Edison German Pizo Rodriguez, ordenó dar cumplimiento a la sentencia de tutela No. 101 del 27 de noviembre de 2017.
- Mediante oficio del 8 de febrero de 2018¹⁹, el Coordinador Grupo Tutelas – INPEC - informó al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de sentencias que envió correo electrónico a los competentes de impulsar el cumplimiento de la sentencia.
- También obran en el expediente siguientes documentos correspondientes a la historia clínica del demandante:

- Atención recibida en octubre de 2017²⁰:

“MC “Me dio duro a la mano”

Paciente con cuadro clínico de varios meses de evolución consistente en salida de una masa a la mano derecho, visión borrosa de lejos y cerca, niega otra sintomatología.

(...)

Dx 1. Lipoma en mano derecha

2. Trauma de refracción

PLAN 1. Valoración por dermatología

2. Valoración por optometría(...)

- Atención recibida el 1 de diciembre de 2017²¹:

“Paciente de 35 años con AP de trauma ocular hace 3 años, desde entonces con visión en ojo derecho alterada manifiesta ve la mitad del ojo .

Manifiesta ha sido visto por optometría pero nunca ha sido enviado a oftalmología.

AP. Pat hemianopsia del ojo derecho

(...)

Dx 1. Hemianopsia derecha

Plan: Valoración prioritaria por oftalmología”

¹⁸ Folios 43-44.

¹⁹ Ver folio 111.

²⁰ Ver folio 116.

²¹ Ver reverso del folio 102-fl 117.

- Atención recibida el 9 de febrero de 2018²²:

"Nota Médica

"Tutela"

"Paciente de 3 años con antecedente personal de trauma ocular hace 3 años aproximadamente, desde entonces con hemianopsia en ojo derecho progresiva, fue visto el 01/12/17 por igual cuadro de donde se generó orden prioritaria para oftalmología hasta ahora sin ser valorado por la especialidad.

Al examen físico sin hallazgos evidentes en globo ocular, requiere valoración especializada.

Dx hemianopsia derecha

Plan:

- 1. Valoración prioritaria por oftalmología # 2."*

- Valoración por oftalmología recibida el 22 de mayo de 2018²³:

"Cicatriz macular

Ruptura cornea"

De la secuencia anterior, se puede establecer que, aunque efectivamente el señor Edison Germán Pizo Rodríguez conoció de la lesión sufrida en su ojo derecho, desde el mes de julio de 2015, sólo a partir de la valoración por parte del oftalmólogo, que se produjo el 22 de mayo de 2018, es cuando se consolida el daño por el cual reclama la reparación a través del medio de control interpuesto. Esto por cuanto es en ese momento cuando al demandante le es diagnosticada una ruptura de córnea.

Dadas las circunstancias anotadas, puede observarse sin mayor esfuerzo que su situación encaja perfectamente dentro de las posibilidades demarcadas en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, en los que se ha afirmado que para contar la caducidad de la acción cuando se demandan los daños derivados de una afectación corporal, no basta con tener en cuenta la fecha en la que se produjo la misma, sino que es preciso determinar el momento en el cual la víctima tuvo conocimiento completo e informado de su naturaleza, su irreversibilidad y de las repercusiones que podría generarle en su vida cotidiana.

Por tanto, en este caso, sólo a partir de la valoración médica realizada con fecha 22 de mayo de 2018 es cuando el señor Edison Germán Pizo Rodríguez tiene conocimiento de la gravedad de la lesión sufrida en su ojo derecho. Así pues, es a partir del día siguiente a la emisión de la aludida valoración que, se empieza a contar el término de caducidad del medio de control y no desde la fecha de ocurrencia de los hechos, tal como lo sostuvo la providencia recurrida, motivo por el cual, a la fecha de presentación de la demanda, el 25 de junio de 2019²⁴, aún no había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, consagrado en el artículo 164 del CPACA.

²² Reverso del folio 119.

²³ Ver folio 131.

²⁴ Ver folio 144.



Radicación : 2019-00170-01
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
Accionante : EDISON GERMAN PIZO RODRIGUEZ
Accionado : INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Por lo expuesto, se revocará la decisión recurrida para en su lugar ordenar al *A-quo* que provea sobre su admisión, previa verificación de los demás requisitos exigidos por la ley procesal.

En consecuencia, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en Sala Jurisdiccional de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR el numeral **PRIMERO** del auto interlocutorio 884 de fecha 21 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cali, mediante el cual se dispuso **RECHAZAR POR CADUCIDAD** la demanda frente a las lesiones ocasionadas al señor Edison Germán Pizo Rodríguez, el mes de julio de 2015, y en su lugar se **ORDENA** que se provea sobre la admisión de la misma, previa verificación de los demás requisitos exigidos por la ley procesal.

SEGUNDO.- DEVUÉLVASE al Juzgado de origen, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia.²⁵

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,


LUZ ELENA SIERRA VALENCIA
Magistrada

²⁵ ACH
VcBo Secretario